

Tribunal, decreta: que debia confirmar y confirma la referida sentencia. Hágase saber; remítase copia certificada de esta resolución al Juzgado respectivo, y en seguida para su revision elévese á la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia. Lo mandó y firmó el C. Lic. Miguel Sandoval, Magistrado de este Tribunal de Circuito; doy fé.—*Miguel Sandoval. Felipe de J. Almazan.*

Es copia de su original, para su publicacion en el Semanario Judicial.—*Felipe de J. Almazan.*

Pedimento del C. Procurador General de la Nacion.

El que suscribe encargado interinamente de la Fiscalia, dice: que el Juzgado de Distrito de Puebla en 15 de Noviembre de 1873 en vista de una comunicacion que dirigió el C. Cefe Político de Cholula al C. Gobernador de ese Estado, mandó instruir la correspondiente causa al cura de Santa Clara Ocoyuacan, D. Antonio Bonilla, por la conducta subversiva que observó con motivo de la protesta á las adiciones constitucionales que prestaron los empleados respectivos. Que seguida la causa en la forma legal, el expresado Juez absolvió del cargo al acusado, dejándole á salvo sus derechos para deducirlos contra quien le conviniera; cuya sentencia, habiendo sido confirmada por el Tribunal de Circuito respectivo, ha causado ejecutoria, segun lo prevenido en el artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826. Así es que esta Sala debe limitarse á revisar la causa con objeto de exigir la responsabilidad á los jueces si hubiera para ello lugar; y como el que suscribe al examinar esta sumaria, no ha encontrado mérito para exigir dicha responsabilidad, pide á esta Sala se sirva decretar de conformidad con este pedimento dando por revisado este proceso.

México, Febrero 25 de 1874. — *Garcia Ramirez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 20 de 1874. — Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívense á su vez el Toca. — *José M. Iguasiase. Pedro Ogazon. Ignacio M. Altamirano. Juan J. de la Garza. S. Guzman. Rique. Landa, secretario.*

México, Abril 7 de 1874.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chicpas, por el C. Ramon Cancino, vecino de la Villa de Tuxtla Chico, del Departamento del Soconusco, contra una providencia del Presidente municipal de dicha Villa, en virtud de la cual se manda reducir la area del terreno que en los egidos de la misma ocupa, con algunos llenos de su propiedad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal en el juicio de amparo que ante V. promovió el C. Ramon Cancino, del vecindario de la Villa de Tuxtla Chico, en el Departamento del Soconusco, por haber, el C. Presidente municipal de aquel lugar, ordenándole la reduccion del extenso terreno de egido que ocupa con una finca rústica que allí ha formado, de conformidad con el decreto de 27 de Enero de 1869, supuesto el estado del juicio referido, que es el de estar corriendo los seis dias, que para tomar apuntes y presentar sus informes por escrito, señala el artículo 13 de la ley general de 20 de Enero de 1869, á las partes que en estos juicios litigan, dice: que para evidenciar el derecho que el promovente puede tener; resulta de los au-

tos la certidumbre de los puntos siguientes:

Primero. Que el mencionado C. Ramon Cancino, posee en el citado egido una estension de ochocientas cuerdas, sembrada en parte de zacaton, caña y árboles frutales, y el resto destinado para cemenenteras, con mas cuatro mancuernas de bueyes y diez vacas regegas.

Segundo. Que con la posesion de dicho terreno, ha superado la área ó lote que las leyes agrarias designan en el egido á cada individuo, como se pasa á demostrar.

Varias leyes de derecho comun, entre ellas la 9 tit. 28 7 tit. 29 23 tit. 32, partida 3ª y L. 13, tit. 9 partida 6ª prescriben que los egidos de cada pueblo se establezcan para el uso comun de sus moradores no pudiendo nadie apropiárselos ni ganárselos por prescripciones, ni adjudicar en ellos ni mandarlos en legado. Las leyes del Estado que desde 1826 se dieron, hablan de esta misma materia, se hallan en consonancia con las ya dichas; por manera que todo individuo ha tenido y tiene derecho de adjudicar cierta estension de egido en posesion, nunca en propiedad. El mismo decreto de 27 de Enero de 1869, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de dividir los egidos, atendiendo al número de los labradores de cada pueblo, procediendo á quitar á los que tengan un exceso, para dárselo al que lo necesite.

Por manera que, recorriendo éstas y todas las demás leyes que se han dado en este respecto, no hay una sola que faculte al individuo para que pueda tomar la estension de terreno que quiera y pueda cultivar, sino lo que la autoridad respectiva le señale. Y como el C. Cancino ocupa una porcion exorbitante y contra lo prescrito en las leyes agrarias citadas, se sigue, que no se lo despoja de una cosa propia, é indebidamente invoca el artículo 27 de la Carta fundamental de la República, pues como se ha dicho, no tiene propiedad en el terreno que ocupa, sino solo una posesion precaria, y en la parte sola que las le-

yes le conceden, como miembro del municipio á que pertenece.

Esto no obstante, nunca podrá negarse que Cancino es propietario de algunos terrenos de la finca que posee en el egido dicho, y decirse que afectándose esta propiedad, con la orden á que se ha aludido, se viola el artículo que invoca en su favor. Empero la citada Orden municipal no le despoja ni ataca su propiedad, pues aquella solo se restringe á reducir el exceso de terreno que indebidamente ocupa, ya sea que lo haya estendido paulatinamente, ó comprando algunos pedazos como lo asegura, sin que aparezca justificacion alguna de ello.

La única argumentacion que el peticionario puede emplear con buen éxito, por considerarse como prueba de un carácter casi indestructible, es lo que indica su apoderado C. Lic. Flavio Paniagua, en el párrafo 15 de su alegato; pues en efecto el decreto de 24 de Diciembre último, da una especie de estabilidad á las fincas ya formadas en los terrenos de egidos, prohibiendo que en lo adelante se le de mayor ensanche, y que en ellos se formen otras nuevas; pero esto se entiende en el juicio respectivo y ante la autoridad competente, y no en el que se ha promovido, toda vez que no se palpe violada garantía alguna de individuo.

Sentados estos precedentes, el Promotor que suscribe no ve violado el artículo 27 de la Carta fundamental, que la parte alega en su favor; y por tanto pide al digno Juzgado de V. resuelva: que la Justicia de la Union, no ampara ni protege al C. Ramon Cancino, contra la orden dada por el C. Presidente municipal de la Villa de Tuxtla Chico, para que reduzca á términos legales la área de terreno que tiene ocupada con su finca en los egidos de aquella misma.

San Cristóbal Las Casas. Febrero 24 de 1874.—*Carlos Ballinas.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Febrero 28 de 1874. Visto el presente juicio de amparo, interpuesto por el C. Ramon Cancino, vecino de la Villa de Tuxtla Chico, del Departamento del Soconusco, alegando hallarse violadas en su persona las garantías de que trata el artículo 27 de la Constitución, por una providencia del Presidente municipal de dicha Villa, en virtud de la cual se manda reducir la área del terreno que en los egidos de la misma ocupa con algunos llenos de su propiedad el referido Cancino. Visto lo espuesto por la autoridad informante, con los documentos de justificación que acompaña; las pruebas aducidas; lo alegado por las partes; el auto de citación para definitiva, y cuanto mas verse debía y de autos consta.

Considerando: que según lo espuesto por la autoridad informante, sus procedimientos reconocen por origen una orden de la Gefatura política de su Departamento, en que se previene el cumplimiento del decreto de 27 de Enero de 1869, que en lo conducente dice:

“Art. 1º Estando prohibidos por decreto de 3 de Febrero del año próximo anterior, la crianza y reparto de ganado mayor en los egidos, ninguno puede establecer en ellos corrales ó potreros que tengan por objeto la referida crianza ó reparto. Los individuos que actualmente tengan en los egidos la dicha crianza y corrales ó potreros que sirvan para ella, la trasladarán á otro lugar ó fuera de ellos, y destruirán los corrales ó potreros dentro de un mes de publicado el presente decreto.

“Art. 2º Los que no cumplan con lo que previene el artículo anterior, serán lanzados en juicio sumario por la autoridad respectiva, á pedimento Síndico, é incurrirán en una multa.

“Art. 3º Los Ayuntamientos dispondrán que el repartimiento de los egidos sea justo y proporcionado al número de los labra-

dores, procediendo á quitar á los que tengan un exceso, el que fuere, para darle al que lo necesite. Este arreglo quedará concluido dentro de un año contado desde la publicación de este decreto;” y que según las constancias de autos, el quejoso posee hace doce años, la porción de egidos que se le disputa, con cercas, corrales, vacas de ordeña, trapiche, plataneros, canales y un caballo; todo lo cual forma, según dice, el patrimonio con cuyos frutos sostiene á su familia.

Considerando: que si el proceder de la autoridad está motivado en el decreto de 27 de Enero que se cita, en que se previene que sus infractores sean lanzados en juicio sumario de los egidos, por la autoridad respectiva y á pedimento Síndico; no hallándose llenadas estas condiciones respecto del quejoso, es indudable que está vulnerado el artículo 14 de la Constitución, conforme al cual “nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley.”

Considerando: que si por lo dispuesto en el artículo 3º del propio decreto de 27 de Enero de 1869, se ha de quitar á Cancino el exceso de las posesiones que tiene, sin previa indemnización del valor de sus llenos y el de la parte de las mismas posesiones comprada, y esto por la Gefatura política, que como aparece, no es la autoridad competente en el caso, es también cierto que se hallan vulnerados los artículos 16 y 27 de la Constitución.

Por tanto, definitivamente resolviendo, con fundamento de los artículos citados y de la ley de 20 de Enero de 1869, se falla: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Ramon Cancino, contra los actos del Presidente municipal de la Villa de Tuxtla Chico, que han dado caso al presente recurso.

Hágase saber, y previa citación fiscal, dése cuenta con estas actuaciones á la Cor-

te Suprema de Justicia, para su revision, acompañándose copia del anterior pedimento fiscal, y de este fallo, para que se publique como está mandado.

Así lo proveyó y firmó el C. Juez de Distrito propietario, del Estado, ante el escribano del despacho, que da fé.—*Juan Z. Ramirez.—J. Crisó tomo Lara.*

San copias que certifico. San Cristóbal Las Casas, Febrero 28 de 1874.—*J. Crisó tomo Lara.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 23 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por el C. Ramon Cancino, contra la providencia dictada por el Presidente municipal de Tuxtla el Chico, mandando reducir á la medida legal la Arca de terreno que ocupa en los egidos del pueblo, con fundamento del decreto de fecha 27 de Setiembre de 1869 expedido por la H. Legislatura del Estado, cuya providencia, segun manifiesta el quejoso, viola en su persona la garantía que consigna el artículo 27 de la Constitucion federal; y

Considerando: que si bien el decreto de la H. Legislatura del Estado de 27 de Setiembre de 1869 en que funda el Presidente municipal sus procedimientos, repite la prohibicion de tener en los egidos de los pueblos, crianza y repasto de ganado mayor y corrales ó potreros dedicados á este objeto; disponiendo ademas que el repartimiento de los egidos sea justo y proporcionado al número de labradores, procediéndose á quitar el exeso á los que lo tuvieran; esta misma ley determina espresamente cuales son las autoridades que estan facultadas para hacer efectivas sus disposiciones, previniendo que en juicio sumario, ante la autoridad respectiva y á pedimento del Síndico, sea como deba procederse al lanzamiento de los que persistieren en tener dicha crianza de gana-

do mayor, así como que los ayuntamientos serán los que practiquen el repartimiento de los egidos; que en consecuencia no siendo el presidente municipal la autoridad á quien dicho decreto encomienda la ejecucion de sus disposiciones, no ha podido despojar al C. Cancino de sus posesiones y privarle de los llenos de su propiedad con que los ocupa, cualesquiera que sea el motivo que se alegue para fundar ese procedimiento.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 16, 27 y 101 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Chiapas en que declara, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Ramon Cancino, contra los actos del Presidente municipal de Tuxtla el Chico que ha motivado el presente recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Iglesias—Ogazon—Garza.—Arteaga.—Ordaz.—Ramirez.—Castañeda.—Guzman.—Velasquez.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia, México, Junio 3 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.